



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, diciembre 14 de 2022

Radicado: 05001 31 05-019-2017-00535
Accionante: GUSTAVO ADOLFO ESPINAL MAZO
Demandado: COLPENSIONES
Proceso: EJECUTIVO LABORAL

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Gustavo Adolfo Espina Mazo adelanta el proceso ejecutivo laboral a efectos de obtener el reconocimiento de un saldo insoluto por concepto de intereses de mora y costas procesales, conceptos ordenados en sentencia del 27 de febrero de 2013 confirmada por esta corporación que estableció la obligación de pagar la suma de \$182'894.265 como retroactivo pensional causado entre el 01/09/2008 al 28/02/2011, con sus intereses de mora teniendo como hito inicial el 02/01/2009, además de \$37'168.353 como costas procesales.

Adujo que pese a que mediante resolución GNR 36417 de 2015 se pagó aquel retroactivo y \$242'959.817 como intereses de mora, estos son deficitarios, reclamando \$33'148.691, además las costas procesales.

En providencia del 10 de abril de 2018 se libró mandamiento de pago por las sumas pedidas (pág. 31/32), se notificó a la accionada quien propuso excepciones, mismas que fueron resueltas desfavorablemente en providencia del 11 de octubre de 2019, disponiendo seguir adelante por la suma de \$4'112.590 como diferencia en los intereses de mora y \$37'218.535 por costas procesales (pág. 82/83), permaneciendo el proceso inactivo a espera que las partes presentaran la liquidación del crédito, requerimiento elevado por el Despacho en autos del 05/10/2020 (pág. 85) y del 01/02/2021 (pág. 88).

Sin respuesta de las partes, en auto del 8 de noviembre de 2022 se decretó el desistimiento tácito, argumentando para ello que la actuación que se reprocha es una carga de los litigantes y estando este inactivo por más de 2 años, aplicó la consecuencia del artículo 317 del CGP ordenó el archivo del expediente, previa desafectación del sistema (archivo No 3).

Inconforme con la decisión fue recurrida por la parte ejecutante exponiendo que el 25 de febrero de 2021 solicitó al despacho copia de la diligencia que resolvió las excepciones.

Añade que en el trámite laboral no es aplicable el desistimiento tácito en tanto al funcionario judicial le compete conducir el proceso, impedir su paralización y por el contrario aplica el artículo 30 del CPTSS que alude al procedimiento en caso de contumacia. Así las cosas, solicita se conceda un término para presentar la liquidación del crédito (archivo No 4). Decisión que mantuvo el juzgado de origen indicando que la solicitud de una pieza procesal no comporta el cumplimiento de

las cargas procesales, por lo que remitió el trámite a esta corporación (archivo No 6)

ALEGATOS

Concedido el término de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 Colpensiones presentó escrito donde expone debe confirmarse la decisión de primera instancia, toda vez que la activa ha sido renuente a cumplir los llamados del despacho para presentar la liquidación del crédito, permaneciendo el trámite inactivo por más de 2 años.

CONSIDERACIONES

Para resolver la controversia planteada, resulta indispensable acudir al artículo 30 del C.P.T y de la S.S, modificado por el artículo 178 de la Ley 712 de 2001 que establece:

“ARTICULO 30. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTUMACIA. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001. Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación.

Si el demandante o su representante no concurrieren a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia.

Si no compareciere ninguna de las partes se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77.

Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de trámite.

PARÁGRAFO. Si transcurridos seis (6) meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente”

Sobre el propósito de la mencionada norma se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C- 868 de 2010, indicando que la inactividad de las partes no impide el normal desarrollo de proceso, dadas las amplias facultades del juez como director del proceso, ya que una vez instaurada la acción, el proceso no se paraliza por la inasistencia de las partes, sino que debe culminar. Así lo indicó la Corte Constitucional:

“Como se puede apreciar no existe una única herramienta para garantizar la efectividad de la administración de justicia. Es más, éstas deben diseñarse en función de garantizar de la mejor manera los derechos amenazados o vulnerados. En el caso del proceso laboral, si bien al juez no le es permitido el inicio oficioso de los procesos porque cada uno de ellos requiere de un acto de parte, (la presentación de la demanda), una vez instaurada, el juez debe tramitar el proceso hasta su culminación, y si una de las partes o ambas dejan de asistir a las audiencias, no por ello se paraliza el proceso, pues el juez debe adelantar su trámite hasta fallar. En tal proceso, el legislador optó por dotar al juez de amplísimos poderes como director del mismo y complementariamente estatuir la figura de la contumacia con un triple efecto: (i) evitar la paralización del proceso en unos casos, (ii) proceder al archivo del proceso en otros, (iii) continuar con el trámite de la demanda principal; y (iv) asegurar que la protección de los derechos de los trabajadores no se postergue indefinidamente por la falta de actuación del empleador demandado. Y esto es así porque el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.[24] La jurisprudencia constitucional ha reconocido al legislador libertad para regular aspectos como los siguientes”

Indicó la Corte que a diferencia de la figura del desistimiento tácito consagrada en el artículo 346 del C.P.C, la legislación laboral contempla una situación garantista para el trabajador, ello debido a los derechos en discusión con los que se satisfacen mínimos fundamentales. Resaltó la alta Corporación que la contumacia en la legislación laboral no es un método de terminación del proceso, sino un impulso oficioso del mismo así indicó la corte:

“Observa la Corte en todo caso que la figura de la contumacia resulta más garantista de las finalidades de protección de los derechos de los

trabajadores que tiene el proceso laboral, específicamente de otorgar mayores garantías a la parte débil del proceso, el trabajador. En efecto, en el desistimiento tácito cumplidas las condiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para sancionar a la parte inactiva, la consecuencia es la terminación del proceso, mientras que la figura de la contumacia, teniendo en cuenta las causales por las cuales procede, tiene como consecuencia el otorgamiento de mayores poderes al juez para impulsar el proceso laboral y garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores”

Se aclara que pese a la que la jurisprudencia referenciada alude al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, sus conclusiones son aplicables al caso concreto en tanto las premisas legales de tal norma se reprodujeron en el artículo 317 del vigente CGP.

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la CSJ explicó que el principio de contumacia genera la posibilidad de adelantar el trámite procesal aun sin la comparecencia de las partes, ello cuando estas se encuentren debidamente integradas al proceso, al respecto la providencia SL 15381 de 2016 indicó:

“El artículo 30 del CPT y de la SS., modificado por el 17 de la Ley 712 de 2001 contempla lo que se ha denominado principio de contumacia, que no es otra cosa que continuar adelante con el trámite procesal una vez que el demandado fue notificado personalmente de la acción y no la respondió.

Con las anteriores premisas, encuentra la sala acertadas las apreciaciones del recurrente ya que, pese a los requerimientos a las partes, no se ha avanzado en la etapa de liquidación del crédito. Empero la consecuencia no era la terminación del proceso, y cancelación del registro en el sistema de gestión judicial, sino su archivo, el que en todo caso tiene efectos transitorios, pudiéndose reactivar una vez se satisfaga la actuación que se halle pendiente.

En adición debe tenerse presente que la acción omisa pudo haber sido suplida por el despacho tal como lo enseña el artículo 446 del CGP que explica que, luego de resueltas las excepciones, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito, expresión que revela que esta actuación es potestativa y que en todo caso es necesaria la aprobación del despacho, por tanto, bien pudo haberse realizado la liquidación por el despacho.

En suma, pese a que la partes han desatendido el trámite, debe tenerse presente que dentro del esquema procesal laboral no se consagra el desistimiento tácito del proceso, por cuanto el principio de contumacia comporta la facultad del fallador para adelantar el trámite aun sin la comparecencia de las partes; forzoso es concluir que la consecuencia de la inactividad de las partes llevaba ora a la elaboración oficiosa de la liquidación del crédito, ora al archivo temporal del proceso ejecutivo, no a su terminación.

Así las cosas, será revocada la decisión del fallador de instancia, y a efectos de dar continuidad al mismo, se impone a las partes que dentro de los 5 días siguientes a la actuación que dé cumplimiento a lo resuelto por esta corporación, presente la liquidación del crédito.

Resta por indicar que no se generan costas en esta instancia.

Por lo expuesto, **LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, REVOCA** la providencia de noviembre 5 de 2022 en su lugar dispone la continuidad del trámite, donde le corresponde a las partes, dentro de los 5 días siguientes al auto de cumplimiento a lo dispuesto por esta corporación, presentar la liquidación del crédito.

Sin costas en esta instancia.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

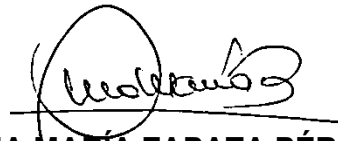
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 17 de enero de 2023